

ETA: UN ANÁLISIS DE SITUACIÓN

El próximo mes de diciembre se cumplen cuatro años de la firma del Acuerdo por las Libertades y contra el Terrorismo, suscrito por el Partido Popular y el Partido Socialista Obrero Español. La situación actual es radicalmente distinta a la que había cuando se firmó: ETA, después de volver a los atentados en el año 2000, estaba llevando a cabo una dura ofensiva terrorista en la que buena parte de las víctimas eran militantes de los dos partidos o líderes sociales e intelectuales del constitucionalismo en el País Vasco. Cuatro años después, la organización terrorista se encuentra debilitada como nunca lo había estado.

En diciembre también se cumplirá otro aniversario, el de la propia ETA, que existe desde hace 46 años. En este tiempo ha ido aplicando toda clase de estrategias para conseguir la independencia del País Vasco: desde la que abogaba por la derrota militar directa de España, a la que pretendía provocar una insurrección general de la población, pasando por el intento de conseguir en una negociación lo que no podía alcanzar con las armas. En los últimos nueve años la estrategia de la banda terrorista ha consistido en intentar establecer un frente nacionalista para avanzar hacia la independencia de forma unilateral, silenciando a la población no nacionalista, cuyos líderes políticos y sociales han sido atacados con saña. Cada una de estas estrategias precedentes fracasó y ahora estamos en un tiempo de crisis de la última de ellas.

Florencio Domínguez es periodista y escritor. Especialista en terrorismo etarra, es autor de *Dentro de ETA* o *Las raíces del miedo*.

La ETA que hemos soportado durante los últimos veinticinco años ha operado sobre la base de un doble esquema de actuación: manteniendo, por un lado, una estrategia invariable de fondo, a largo plazo, que es la aspiración a la independencia del País Vasco, y una segunda línea a medio plazo que se ha modificado según la época. La primera aspiración marca el horizonte utópico de los terroristas, su programa máximo, que sirve como referencia ideal, pero que, sin embargo, se presenta como algo demasiado lejano. Para completar ese horizonte, ETA se fija una segunda línea de objetivos más cercana que tiene la función de motivar tanto a sus miembros como a su base social. La proximidad de estos objetivos, que parecen estar al alcance de la mano, contribuye a justificar el sacrificio personal que a veces supone la militancia en la organización terrorista.

ETA ha introducido en ocasiones objetivos coyunturales, tácticos, que cuando han tenido éxito han contribuido a reafirmar la moral de victoria del grupo, extendiendo la convicción de que al final habría un triunfo en las reclamaciones principales. Lemóniz y la autovía de Leizarán son los paradigmas de estos objetivos coyunturales que tienen una influencia decisiva en la continuidad del grupo terrorista.

Desde 1978 hasta principios de los años noventa, el horizonte intermedio de ETA ha sido la estrategia de la negociación con el Gobierno. Toda la actividad terrorista ha ido encaminada a provocar una negociación con el Estado a través de la cual esperaba conseguir la Alternativa KAS, aunque, sobre todo, lo que esperaba era obtener la legitimidad política de ser un interlocutor reconocido por el Gobierno enemigo.

Todos los esfuerzos de ETA y de su entorno durante esos años estaban encaminados a conseguir la famosa negociación, y para lograrlo lo que necesitaban era acumular fuerzas, uno de los conceptos más repetidos en la izquierda abertzale durante los años ochenta. Acumular fuerzas significaba que ETA estuviera fuerte, y para demostrarlo lo mejor era hacer campañas intensas de atentados; pero también requería que HB tuviera éxitos electorales y tuviera presencia política. Se requería además un clima intenso de movilización ciudadana en favor de la negociación.

La negociación era el objetivo inmediato que parecía estar al alcance de la mano y que justificaba los sacrificios de los miembros

de ETA. Cualquier activista encarcelado estaba convencido de que saldría en libertad en poco tiempo porque la negociación entre sus jefes y el Estado estaba a la vuelta de la esquina. Las noticias que regularmente aparecían en los periódicos sobre gestiones de intermediarios entre el Gobierno y ETA y sobre intentos de establecer contactos alimentaban estas expectativas que se consumaron entre 1987 y 1989 en las conversaciones de Argel.

Lo paradójico de la estrategia de la negociación es que ETA entendía que negociar significaba que el Gobierno cediera todo y ellos no cedían nada en absoluto. La propia organización terrorista no deja lugar a dudas al calificar el término negociación como palabra «inusual e incorrecta» por cuanto, según recoge en un boletín interno de 1980, «los cinco puntos mínimos [de la alternativa KAS] por su misma naturaleza no son negociables, sino a lo sumo concretizables (sic) entre el Gobierno español y ETA»¹.

En otro documento, un acta de una reunión de la Coordinadora Abertzale Socialista (KAS) celebrada el 27 de agosto de 1987, se recoge la afirmación del representante de ETA en ese encuentro: «Los contenidos de la Alternativa son innegociables y tienen un carácter de mínimos, que deben ser tomados en su totalidad y no punto por punto»². Para el representante etarra únicamente «pueden ser objeto de negociación los plazos y los mecanismos de aplicación de dichos puntos».

Estas citas reflejan con bastante claridad el espíritu con el que afronta ETA las negociaciones con el Gobierno. Hablando en términos castrenses, se trata de conseguir en la mesa de conversaciones lo que no se ha logrado en el campo de batalla.

La estrategia de la negociación fue en su día muy popular, no sólo entre los simpatizantes de ETA sino en sectores más amplios de la sociedad vasca. Los terroristas se presentaban como unos voluntariosos bienintencionados dispuestos a solucionar los problemas mediante el diálogo, frente a un gobierno que ponía más impedimentos y que era presentado como reacio al diálogo, a pesar de las docenas y doce-

¹ *Zutabe* sin número, julio de 1980.

² Acta de la reunión de KAS celebrada el 27 de agosto de 1987. El original fue incautado tras la detención del dirigente de ETA Santiago Arróspide Sarasola, «Santi Potros».

nas de contactos y tanteos mantenidos con la organización terrorista o sus intermediarios.

Nadie se leía la letra pequeña que escribía ETA, aquella que decía que no estaba dispuesta a ceder nada en esas conversaciones y que únicamente debía renunciar a todo su interlocutor.

La estrategia de negociación tuvo su principal éxito en 1989, cuando enviados del Gobierno y de la organización terrorista se sentaron de manera oficial frente a frente en Argel y durante tres meses mantuvieron un proceso de conversaciones acompañado de una tregua. Sin entrar en detalles acerca de aquellas conversaciones, lo paradójico fue que el éxito de la estrategia supuso al mismo tiempo su fracaso de cara al futuro. ETA cortó las conversaciones, puso fin a la tregua y reanudó la actividad terrorista en medio de fuertes discusiones internas. Este clima de desconfianza hacia lo que había supuesto Argel y la crisis organizativa provocada en 1992 por la operación de Bidart, en la que fue capturada la cúpula de ETA al completo, fueron las causas de un cambio de estrategia.

Bidart abrió un proceso de debate interno que condujo a una sustitución de la estrategia de negociación por la de la construcción nacional. La expresión pública de este cambio se reflejó en el comunicado del 26 de abril de 1995 con el que ETA asumió el atentado contra José María Aznar.

Este documento plantea que el Estado debe aceptar –sin negociar, por supuesto– dos exigencias previas: el reconocimiento de la autodeterminación y la unidad de Navarra a la CAV oculta bajo el eufemismo de «unidad territorial». Además, se reclama al Estado «respeto de los resultados del proceso democrático que se abrirá en Euskal Herria». «No se deben imponer límites a la palabra del pueblo –dice la organización terrorista–. Por lo tanto, el Estado deberá aceptar que se respetará tanto el desarrollo de ese proceso democrático como sus resultados, sean cuales fueren»³.

Con este documento ETA introduce, con notable éxito, en la jerga política vasca la idea de «respetar la palabra de Euskal Herria», que en poco tiempo va a ser moneda de uso corriente en PNV y EA y en

³ *Egin*, 26 de abril de 1995.

el sindicalismo nacionalista, camuflada como «ámbito vasco de decisión». Sobre este concepto se ha producido la radicalización soberanista del nacionalismo institucional durante los últimos seis años. Sobre él descansa también el Plan Ibarretxe.

La Alternativa Democrática supone el abandono de la idea de que el futuro del País Vasco se decidiría en una mesa entre ETA y el Estado. En su lugar, se sientan las bases para trabajar por el establecimiento de un frente nacionalista para desarrollar la «construcción nacional». ETA renuncia a imponerse al Estado y opta por intentar colocarse al frente del conjunto del nacionalismo vasco para imponerse a la parte no nacionalista de la sociedad.

ATAQUES CONTRA EL PP Y EL PSOE

Una consecuencia de esta reorientación de la línea de ETA es el asesinato sistemático de los dirigentes políticos del PP y del PSOE con el propósito de silenciar en el País Vasco la voz de los no nacionalistas. Con esta finalidad se incluye también en la lista de los objetivos habituales de los terroristas a los líderes sociales e intelectuales del constitucionalismo vasco. Los profesores universitarios, los periodistas, los directivos de empresas de comunicación, los miembros de los Foros y plataformas críticos con el nacionalismo pasan a estar en el punto de mira de ETA.

La decisión de atentar contra dirigentes de los partidos políticos constitucionalistas fue adoptada por ETA tras una discusión interna celebrada en 1994, según recoge la organización terrorista en un boletín interno⁴. La plasmación inicial de este acuerdo fueron los atentados contra el presidente del PP de Guipúzcoa, Gregorio Ordóñez, el 23 de enero de 1995, y contra el líder del PP, José María Aznar, el 19 de abril siguiente. La decisión de atentar contra los dirigentes y miembros del PP y del PSOE formaba parte del mismo paquete de discusión que la reorientación estratégica de la banda terrorista. Renunciar al diálogo con el Estado, atacar a los dos grandes partidos que lo gobiernan y constituir un frente nacionalista para forzar la

⁴ *Zuzen*, nº 79.

independencia a través de un procedimiento unilateral, constituyen los tres grandes ejes de las resoluciones que la banda adopta tras el debate de los años 1992-1995.

ETA reconoce que «deliberó» sobre el inicio de los atentados contra «los responsables políticos de España» y presenta la decisión como una respuesta al Pacto de Ajuria Enea «y a otros pactos contra los abertzales». Cree que con estos atentados logró sacar «el conflicto armado» de «los parámetros Guardia Civil-guardaris de ETA» al atacar a «los responsables políticos que eran encargados y participantes del conflicto». «El objetivo: acabar con la impunidad para provocar la opresión de Euskal Herria bajo la protección de los partidos políticos», añade la organización terrorista en el boletín citado.

Era conocida la existencia de un debate interno en el seno de ETA que había sido puesto en marcha en el verano de 1992, en medio de la crisis provocada por la captura de la dirección de la banda en Bidart. Los sustitutos de «Txelis», «Pakito» y «Fiti», en una carta fechada en el mes de octubre de ese año hacían mención a ese debate y, en abril de 1993, hicieron pública su existencia.

La discusión, por lo que se sabe, fue un proceso largo. Algunos de los documentos correspondientes a esta discusión aparecieron publicados en el *Barne Buletina* (Boletín interno) número 67 correspondiente al mes de julio de 1993. Precisamente, uno de esos documentos defiende la idea de atentar contra cargos públicos del PSOE, del PP y del PNV (en este orden) dando una explicación que será asumida por el conjunto de la organización terrorista:

«El día que un tío del PSOE, PP, PNV va al funeral de un txakurra [policía] o cien y se le llena la boca de palabras de condena y lágrimas de cocodrilo, no ve en peligro su situación personal y asume este tipo de ekintzas [acciones] pues están hechos una piña en contra de nuestros derechos como pueblo –se afirma en el citado *Barne*-. Pero el día que vayan a un funeral de un compañero de partido, cuando vuelva a casa quizás piense que es hora de encontrar soluciones o quizás le toque estar en el lugar que estaba el otro (o sea en caja de pino y con los pies por delante)».

Al final del debate, ETA terminará aceptando los atentados contra los partidos de ámbito nacional, pero no los dirigidos contra el PNV, aunque intentará asesinar al entonces consejero de Interior, Juan

María Atutxa, por la implicación de la Ertzaintza en la lucha antiterrorista. Además, aplicará un procedimiento de escalada paulatina de los atentados contra dirigentes políticos.

ETA justifica esta estrategia diciendo que va dirigida contra «los responsables políticos de España». En el *Zuzen* nº 79 la banda explica que la decisión de estos atentados fue aplicada de forma gradual en diversas etapas. La primera etapa fue «de 1994 en adelante, contra destacados y conocidos responsables políticos del PP», según ETA.

Resulta un contrasentido que ETA pretenda atacar contra «los responsables políticos» españoles y elija en primer lugar al partido que tiene menos responsabilidad en esas fechas por encontrarse en la oposición. Seguramente ello obedece a otras razones que ETA no menciona en su publicación y que tienen que ver con el contexto en el que se encontraba la izquierda abertzale en el momento en que comenzaron los atentados contra el PP.

Al igual que ETA, en las estructuras políticas afines (KAS y HB) la crisis de Bidart abrió un debate sobre la estrategia que debía seguir la izquierda abertzale. En el seno del entorno político etarra aparecieron voces que empezaban a cuestionar las armas o, al menos, que planteaban caminos para su desaparición. El asesinato de Gregorio Ordóñez puso fin de manera abrupta al debate señalando cuál era la decisión de la banda y, por eliminación, cuáles eran las posturas que no estaba dispuesta a admitir.

La elección de los dirigentes del PP como objetivos iniciales, probablemente, tiene más que ver con la capacidad de asimilación de los crímenes por parte de la base social de ETA. Cada vez que la banda ha iniciado ataques contra un colectivo nuevo (ertzainas, jueces o periodistas, por ejemplo) ha necesitado hacer un esfuerzo previo para conseguir que los votantes de HB interiorizaran y comprendieran los nuevos asesinatos, a fin de evitar pérdida de apoyos. Y para ello presentaron el asesinato del dirigente del PP como una continuación del atentado contra el almirante Carrero buscando transferir los apoyos que habían tenido cuando mataron al presidente del Gobierno hacia el crimen de San Sebastián.

Para ir mentalizando a sus militantes, ETA empezó los asesinatos de dirigentes constitucionalistas por el PP porque atacar contra socialistas sería de más difícil comprensión en aquel momento entre

sus seguidores. «El PP es hoy en día el representante máximo de la imposición española», afirmaba ETA en el comunicado en el que asumía el asesinato de Ordóñez, pasando por alto el dato obvio de que el PP no estaba en el poder ni en Madrid ni en Vitoria y que su capacidad de influir en las decisiones estaba limitada por su condición de partido de la oposición.

Faltan también en el documento etarra explicaciones que liguen los atentados contra el PP y el PSOE con su cambio de estrategia encaminada a conseguir un frente nacionalista vasco para avanzar por la vía de hecho hacia la independencia. ETA pretende, en primer lugar, constituir este frente, algo que logrará en 1998, y, en segundo, otorgarle una preeminencia política por el procedimiento de excluir del juego político a los no nacionalistas.

La estrategia de asesinar a líderes y militantes populares y socialistas constituye un caso singular de limpieza ideológica practicada en Europa Occidental, como reconoció incluso la Comisión Europea para el Racismo y la Intolerancia, del Consejo de Europa, que en un informe difundido en 2003 se advertía de la «dimensión xenófoba y étnica» de los atentados de ETA⁵.

Después de la primera etapa de atentados mencionada por ETA, el *Zuzen* n° 79 fija las fechas y características de la segunda: «Después de diciembre de 1996, se convirtieron en objetivos todos los cargos y responsables políticos de PP, UA y UPN y los destacados responsables políticos del PSOE». Doce años antes, el 5 de marzo de 1984, la dirección etarra había enviado una carta a sus comandos en la que advertía: «Queremos que os metáis en la cabeza que de atacar al PSOE nada de nada por el momento. Donde debemos atacar y duro es donde está el poder real del Estado, es decir en la Oligarquía y en la clase militar. Al PSOE ya le llegará la hora de rendir cuentas al pueblo vasco». Aquella prohibición había llegado a su fin.

Sin embargo, ETA vuelve a olvidar que antes de la fecha mencionada como inicio de la segunda fase, en febrero de 1996, había matado ya a un socialista, el abogado donostiarra Fernando Múgica, y que éste, además, no ocupaba ningún cargo en su partido, por lo que difi-

⁵ *El Correo*, 9 de julio de 2003.

cilmente puede ser calificado de «destacado responsable» del PSOE. No sólo eso. El segundo atentado contra un socialista se perpetró el 10 de junio de 1997 en Bilbao, y la víctima, que resultó herida, fue un militante de base del PSE-EE, sin ninguna proyección pública. Tampoco puede decirse que se trate de un «destacado responsable» porque no tenía cargo alguno.

Las actuaciones de ETA en este campo y durante este tiempo no se ajustan a sus propias explicaciones porque éstas ocultan la verdadera intención de la banda terrorista, que es, como se ha mencionado antes, silenciar a los no nacionalistas en el País Vasco.

La tercera fase de los atentados la fecha ETA en diciembre de 2000, y consiste en incluir a los «cargos del PSOE» como objetivo, después de la firma del Acuerdo por las Libertades y contra el Terrorismo entre este partido y el PP. Para entonces, la banda ya había matado a Fernando Buesa, Juan Mari Jáuregui y Ernest Lluch y había herido a José Ramón Recalde. El paso práctico de esta tercera fase consistió en considerar a los concejales socialistas como objetivo etarra.

El acoso de ETA al constitucionalismo vasco no se limitó a los atentados contra miembros del PP y del PSOE, sino que incluyó también a líderes sociales e intelectuales que se mostraban críticos con el nacionalismo. Y no fue sólo ETA quien protagonizó ese acoso, sino que también se vieron involucradas en él todas las redes de la violencia callejera cuyos hilos se manejaban desde estructuras afines a la banda terrorista.

Desde que en 1995 asesinara a Gregorio Ordóñez, ETA ha cometido otros 72 atentados contra adversarios ideológicos, en su mayor parte miembros del PP y del PSOE, que han provocado la muerte a 30 personas. Por su parte, los grupos de violencia callejera desde 1993 y hasta el mes de agosto pasado, han perpetrado en el País Vasco y Navarra 871 ataques sectarios, es decir, dirigidos contra adversarios políticos de los terroristas. Han sido atacadas las sedes de los partidos democráticos, agredidos sus militantes, incendiados sus domicilios o propiedades e, incluso, los de sus familiares, así como las instalaciones o equipos de los medios de comunicación. La media indica que, desde hace diez años, cada cuatro días se produce uno de estos ataques contra los adversarios políticos de los terroristas.

PACTO DEL 98

La culminación exitosa de esta estrategia se alcanza en 1998, cuando el PNV y EA, asustados por la movilización social provocada por el secuestro y asesinato de Miguel Ángel Blanco, el concejal del PP de Ermua, optan por acercarse al nacionalismo radical y hacer un pacto con la organización terrorista. En este acuerdo, alcanzado en el verano de ese año, ETA se compromete a establecer una tregua de cuatro meses, a cambio de que PNV y EA asuman la estrategia de construcción nacional y rompan sus vínculos con el Partido Popular y el Partido Socialista, que son catalogados como enemigos.

«EAI-PNV y EA asumen el compromiso de abandonar todos los acuerdos que tienen con las fuerzas cuyo objetivo es la destrucción de Euskal Herria y la construcción de España (PP y PSOE)»⁶, afirma el punto 3 del pacto suscrito por estos dos partidos y la organización terrorista. En este punto, escrupulosamente respetado por los firmantes, se encuentra la clave de la fractura social, la crisis civil y la división entre nacionalistas y constitucionalistas que se registra en el País Vasco desde hace seis años.

Para «blanquear» este pacto secreto –cuya existencia se conoció casi un año después de su firma gracias a los documentos intervenidos en Francia a dirigentes de ETA–, PNV, EA, EH y otras fuerzas políticas y sindicales nacionalistas –además de la coalición vasca de IU, no así la de Navarra– suscribieron la declaración de Estella o de Lizarra en la que se formulaban unas demandas de carácter nacionalista radical, pero que se presentaban como movimientos desinteresados para conseguir el fin de la violencia. «Dicen que van a hablar de paz, pero sólo hablan de nacionalismo», escribió Mario Onaindía (2004, 74) refiriéndose a otra reunión de partidos nacionalistas.

A menudo se ha presentado la tregua de 1998 como un efecto del Pacto de Estella, pero esta interpretación es un error. La tregua fue consecuencia del pacto secreto con el PNV y con Eusko Alkartasuna. La propia ETA ha dejado constancia de este extremo en sus publicaciones internas: «La iniciativa de ETA no es consecuencia del Acuerdo de Lizarra (...). La decisión y el comunicado de ETA [en el que se anun-

⁶ Texto íntegro del acuerdo incluido en la publicación de ETA titulada *La iniciativa de ETA* (ETAren ekimena), de febrero de 2000.

ciaba la tregua] son anteriores al 12 de septiembre [fecha del acuerdo de Estella], desde luego, y no constituyen la respuesta a lo firmado en Lizarra, sino a la idea y la realidad del 'alto el fuego compartido'⁷.

Con ese pacto de agosto de 1998, llega a su punto más alto la estrategia fijada por ETA en 1995: ha conseguido cambiar la línea del PNV y que la división entre demócratas y violentos que caracterizaba el escenario político vasco pase a ser una división entre nacionalistas y no nacionalistas; el PNV se radicaliza, asume algunos de los puntos de vista de la organización terrorista (lo que lleva a una desvalorización evidente del marco estatutario) y rompe los acuerdos que mantenía con populares y socialistas. Mientras, ETA detiene su actividad terrorista, pero los grupos de la violencia callejera intensifican sus ataques contra los constitucionalistas.

Al amparo del acuerdo secreto del 98, se establece un pacto parlamentario con Euskal Herritarrok, se crea un organismo, como la asamblea de electos municipales Udalbiltza, que amenaza con convertirse en un contrapoder frente a las instituciones autonómicas, el PNV y EA se implican de lleno en las movilizaciones en favor de los presos, se renuncia a nuevos acuerdos con socialistas y populares, etc.

Los ritmos de este proceso, sin embargo, no gustaron a ETA cuyas exigencias maximalistas no podían ser seguidas por el PNV y Eusko Alkartasuna, lo que provocó, en julio de 1999, la decisión de romper la tregua, ruptura cuya materialización se hizo en noviembre de ese año.

TREGUAS Y RUPTURAS

En este punto, cabe hacer un inciso respecto a las treguas de ETA. Las treguas son, antes que nada, un problema para la organización terrorista, a pesar de que se las califique de «trampa» y de que la propia banda reconozca esa condición de «trampa». Aunque emplee el tiempo de inactividad para llevar a cabo reorganizaciones internas, el cese de los atentados tiene siempre efectos políticos adversos para los propios terroristas. ETA es consciente de ello y de ahí que en casi 46 años de historia, las treguas se puedan contar con los dedos de una

⁷ *Zutabe*, de marzo de 1999.

mano. Al final, ETA es quien rompe la tregua y ello tiene costes sociales y políticos importantes para el grupo terrorista y para su entorno. Los tuvo en 1989, tras las conversaciones de Argel, y los ha tenido recientemente a raíz de la tregua de 1998-1999.

Uno de esos efectos directos fue el descalabro electoral de Batasuna en las elecciones autonómicas de 2001. A ello hay que sumar la escisión sufrida en las filas de Batasuna y la contestación que ETA ha empezado a encontrar entre la izquierda abertzale.

La tregua de 1998 alumbró la creación de un frente nacionalista por vez primera en la historia democrática reciente. Durante la transición, en 1977, se había intentado un proceso de este tipo, pero no había sido posible concretarlo. Después, ETA y el PNV habían seguido caminos paralelos y en ocasiones enfrentados. La unidad de todos los partidos nacionalistas constituye uno de los mitos más fuertes de esta ideología, por lo que su materialización concreta ilusionó a los abertzales de una y otra sigla. La ruptura de la tregua por causas que ETA no consiguió explicar de manera convincente, provocó un malestar en algunos sectores de Batasuna, que no comprendieron las razones de aquel paso que suponía el final de la unidad nacionalista. Dirigentes históricos como José Luis Álvarez Enparantza, «Txillardegi», que en muchos momentos importantes de la historia de ETA había actuado como guardián de las esencias, rompieron y criticaron a la ETA actual.

Probablemente, ETA pensaba que había consolidado una posición al modificar la postura tradicional del PNV y que había llegado el momento de tratar que la formación nacionalista diera un paso adelante más, empujada por una intensa campaña de atentados contra los constitucionalistas que provocarían la radicalización de éstos y dejaría aislado al partido de Xabier Arzalluz. El asesinato de Miguel Ángel Blanco había sido interiorizado por ETA como el desencadenante de un proceso que había llevado al PNV a pactar con el grupo terrorista.

En un boletín interno, el *Zutabe* nº 100, la organización terrorista destaca los beneficios aportados «por varias acciones discutidas», mencionando expresamente las muertes de José María Ryan, director de la central de Lemóniz, cuyo secuestro y asesinato contribuyó a la paralización definitiva de las obras; el de Gregorio Ordóñez, que sirvió para cerrar discusiones existentes en el seno de la izquierda abert-

zale y afianzar la línea de agresión civil, y el de Miguel Ángel Blanco, que condujo al pacto con el nacionalismo institucional. El crimen de Ermua es interpretado por ETA como un éxito, a la vista de sus resultados políticos.

Teniendo en cuenta estas referencias mentales, ETA calculó que rompiendo la tregua y atentando contra cargos públicos populares y socialistas, en breve plazo habría logrado forzar de nuevo la política del PNV. Sin embargo, la ruptura de la tregua ha tenido efectos catastróficos para la izquierda abertzale.

- a) En primer lugar, porque le ha supuesto un coste electoral de gran magnitud. Después del aumento de votos y protagonismo político que había tenido EH durante las dos elecciones celebradas en tregua, vino el descalabro de las autonómicas de 2001 en las que perdió la mitad de los escaños y casi 80.000 votos. Perdió, sobre todo, la capacidad de condicionar de una manera decisiva al Gobierno de Ibarretxe en el Parlamento vasco.
- b) En segundo lugar, porque entre la base social de la izquierda abertzale se han consolidado posturas críticas con la organización terrorista que antes no eran significativas. El Euskobarómetro, que dirige el profesor Francisco J. Llera, viene detectando desde hace tiempo una pérdida de apoyo a la violencia en las bases de la izquierda abertzale. En su última oleada, dada a conocer el pasado mes de julio, el profesor Llera destacaba como dato significativo «la práctica desaparición del apoyo explícito y total» (un 2%) a ETA en el electorado de Batasuna. El grueso de Batasuna, el 63%, se sitúa en el apoyo a los fines de ETA, pero rechazando sus métodos violentos, o en el apoyo remoto (6%). Otro 28% manifiesta actitudes que reflejan una justificación crítica de ETA. Estos datos revelan un serio problema de legitimación de la violencia en las bases tradicionales de ETA.

Uno de los factores por los que se ha llegado a esta situación es la incomprensión por parte de la base social de la izquierda abertzale de la ruptura de la tregua de 1999. Cuando ETA puso fin a las conversaciones de Argel y rompió la tregua, sus explicaciones fueron asumidas con relativa facilidad: la culpa era del Gobierno español, que no tenía verdadera intención de negociar, y ya se sabe que el Gobierno español es, por principio, el enemigo.

En 1999, sin embargo, a cualquier simpatizante de ETA le resultaba mucho más difícil de entender la ruptura. ETA decía que la culpa era del PNV y de EA, pero los votantes de HB estaban viendo cómo estos partidos tenían un pacto con Arnaldo Otegi en el Parlamento Vasco, habían creado Udalbiltza, habían roto sus acuerdos con el PP y el PSOE, salían a la calle para manifestarse en favor de los presos e, incluso, el Gobierno vasco convocaba un paro de diez minutos porque un etarra enloquecido se había pegado un tiro. Además, en el colmo del absurdo, ETA aseguraba que Mayor Oreja tenía razón cuando dijo que era una tregua-trampa. Ni el más incondicional de los seguidores de la izquierda abertzale podía entender que Mayor Oreja tuviera razón en algo por mucho que lo dijera ETA.

- c) En tercer lugar, la actuación de ETA con la ruptura de la tregua ha acentuado las diferencias internas en el seno de la izquierda abertzale, dando lugar a una escisión de Batasuna, la primera en toda su historia, que ha originado el nacimiento del partido político Aralar.
- d) En cuarto lugar, ETA no ha conseguido restablecer el entendimiento con el PNV y con EA, lo que constituía un elemento central de la estrategia de construcción nacional para enfrentarse de modo desafiante al Estado. PNV y EA desarrollan su propia política, radical, soberanista, pero sin un entendimiento explícito con la organización terrorista, una política que está haciendo mella en las bases de la izquierda abertzale como lo muestra el dato del Euskobarómetro que revela que el plan Ibarretxe obtiene más apoyo entre los votantes de Batasuna que entre los del PNV.

Atentar contra el PNV se ha convertido en un límite que la organización terrorista no se ha atrevido a franquear. Este es uno de los acuerdos secretos adoptados tras el debate interno del pasado año. ETA discutió si incluía al PNV entre sus objetivos y decidió que no.

Tras la ruptura de la tregua, el grupo etarra acercó algunos de sus ataques al PNV tratando de incrementar la presión: incluyó a la Ertzaintza entre los objetivos habituales y asesinó al

presidente de los empresarios de Guipúzcoa, José María Korta, cuya afinidad con el PNV era pública, pero no se atrevió a ir más allá. Y todavía no ha decidido dar ese paso.

Sin un frente nacionalista formal, la estrategia dibujada en la Alternativa Democrática de 1995 se queda sin sentido. ETA puede seguir matando, porque tiene recursos materiales y humanos para ello, pero ni siquiera la propia organización terrorista sabe muy bien para qué: no sabe si es para restablecer el pacto con PNV-EA, ni tampoco si es para negociar con el Gobierno central como en el pasado. En cualquier caso, lo que está claro es que ETA no logra conseguir ni lo uno ni lo otro.

La propia banda es consciente de esta crisis estratégica y ese es el motivo del debate de finales de 2002 y principios de 2003. Paradójicamente, ante el problema principal de ETA, que es la definición de una nueva estrategia, el único resultado del debate fue el reconocimiento de que hay que hacer una nueva estrategia, pero sin decidir cuál tiene que ser. «Ha llegado el momento de revisar la Alternativa Democrática», dice ETA, reconociendo que la estrategia seguida en los últimos ocho años ha tocado techo y ya no es válida.

ACUERDO POR LAS LIBERTADES

Se ha indicado antes que, tras la reanudación de la actividad de ETA en 2000, algunos atentados se acercaron a espacios sociales próximos al PNV, pero el grueso de la actividad terrorista estuvo dirigida contra socialistas y populares. Los miembros de estos dos partidos en el País Vasco no habían estado tranquilos ni siquiera durante la tregua, pues las agresiones de la violencia callejera contra los adversarios ideológicos de los terroristas (los constitucionalistas, fundamentalmente) aumentaron un 82% durante el año 1999.

Sólo a lo largo del año 2000, ETA asesinó a cinco concejales del PP y a cuatro miembros o simpatizantes del PSOE, entre ellos el ex ministro Ernest Lluch y el secretario general de Álava, Fernando Buesa.

La reanudación de los atentados no puso fin a las relaciones entre el nacionalismo institucional y la izquierda abertzale, que a lo largo del año 2000 siguieron negociando un nuevo acuerdo político mediante el intercambio de documentos. El 8 de mayo Batasuna presentó al PNV lo que llamó un «plan para la transición», que fue respondido por una contrapropuesta del partido de Arzalluz el 30 de junio. Dos semanas más tarde, HB enviaba otro documento al PNV titulado «Respuesta y análisis de la Mesa Nacional en relación a la propuesta de los jeltzales respecto a la respuesta dada por Eusko Alderdi Jeltzalea (PNV) a la propuesta de Herri Batasuna».

En medio de los asesinatos de ETA, que se intensificaron en el segundo semestre ante la insatisfacción que produjo el documento del PNV en la izquierda abertzale, el PNV y el brazo político de la banda terrorista negociaban el restablecimiento de un acuerdo. Esta situación convendría que fuera tenida en cuenta cuando se critica el preámbulo del pacto antiterrorista.

El Acuerdo por las Libertades y contra el Terrorismo se gestó entre los meses de noviembre y diciembre de 2000, a iniciativa del PSOE, y se firmó el 13 de diciembre por los secretarios generales de los dos grandes partidos. En el prólogo del documento se denunciaba el fracaso de la estrategia de PNV y EA «que abandonaron el Pacto de Ajuria Enea para, de acuerdo con ETA y EH, poner un precio político al abandono de la violencia». «Ese precio –añadía el texto– consistía en la imposición de la autodeterminación para llegar a la independencia del País Vasco». Socialistas y populares exigían a los nacionalistas el «abandono formal» del Pacto de Estella «y de los organismos creados por éste». Estas exigencias se presentaron como «requisito imprescindible» para alcanzar acuerdos políticos con el PNV y EA.

Además, los firmantes del Acuerdo por las Libertades consideraban que la unidad de los partidos contra el terrorismo debía darse en torno a la Constitución y al Estatuto de Gernika, «espacio de encuentro de la gran mayoría de los vascos», y reivindicaban a las víctimas del terrorismo que hasta poco tiempo antes habían sido las grandes olvidadas.

En el Acuerdo por las Libertades, el PP y el PSOE expresaban de manera explícita «ante el pueblo español nuestra firme resolución de

derrotar la estrategia terrorista, utilizando para ello todos los medios que el Estado de derecho pone a nuestra disposición. Queremos también reforzar nuestra unidad para defender el derecho de los vascos, el de todos los españoles, a vivir en paz y en libertad en cualquier lugar de nuestro país».

Frente a una ofensiva terrorista, precedida de la actuación conjunta del nacionalismo en una estrategia soberanista, los dos grandes partidos se comprometían a dar una respuesta de Estado para acabar con ETA sin pagar ningún precio político.

La acción coordinada de los dos grandes partidos nacionales fue decisiva para la aprobación de la Ley de Partidos, que permitió la ilegalización de Batasuna no por su carácter independentista, como se encargó de subrayar el Tribunal Constitucional, sino por sus vinculaciones con una organización terrorista cuya actividad se ha negado a condenar.

Gracias a las actuaciones derivadas del pacto y a la eficacia de las fuerzas de seguridad, se han conseguido en estos cuatro años dos grandes logros: acabar con la idea de que el terrorismo es eficaz para quienes lo promueven y para quienes viven a su sombra, y acabar con la idea de que ETA no puede ser derrotada policialmente. Uno y otro logro constituyen potentes cargas de profundidad para la supervivencia de la organización terrorista.

LA EFICACIA Y LOS COSTES DEL TERROR

El primer problema de ETA en este momento, además de intentar tener una línea estratégica clara, es mantener la cohesión interna de su base social. A las críticas y desafecciones mostradas desde que rompió la tregua en 1999, hay que añadir que algunos sectores que tradicionalmente han apoyado a ETA encuentran que mantener ese apoyo tiene más costes que beneficios en la actualidad.

Uno de los principales factores que alimentan el terrorismo, y que sirve para mantener el apoyo social, es el de su utilidad. Cuando se acusa a ETA de desarrollar una actividad violenta que no sirve para nada, los terroristas siempre responden citando los éxitos que han tenido: la paralización de Lemóniz, el cambio de trazado de la autovía de

Leizarán o el cambio de postura provocado en el PNV, etc. Estos éxitos parciales alimentan a las futuras generaciones de terroristas.

La propia ETA es consciente de que la eficacia es el argumento clave en defensa de la actividad. El pasado mes de junio ETA difundió un breve documento entre las bases de Batasuna⁸ con el objetivo de justificar la continuidad de la «lucha armada». En este documento se sostiene que lo importante es analizar «los beneficios» que el terrorismo aporta «al proceso de liberación desde una perspectiva histórica» y de manera global. «Cada acción aporta algo en este largo camino y su impacto se perpetúa en el tiempo –añade–. Ya que, por supuesto, es a largo plazo cuando se puede medir el impacto de cada acción. Instalando de nuevo esta forma de lucha dentro de la globalidad, y a la vista de las consecuencias que engendra, nos damos cuenta de que contribuye a hacer que el proceso de liberación avance».

ETA afirma que su mayor inquietud es «que su actividad sea eficaz». «Es la razón por la que el debate sobre la práctica de la lucha armada es permanente entre los militantes de ETA –agrega–. Este debate sobre la práctica mejor adaptada a las necesidades de nuestro país se vuelve a encontrar en cada acción, en la manera de realizarla, en las consecuencias que engendra o en sus aspectos técnicos».

La organización terrorista insiste como un punto clave en la idea de la «eficacia de la lucha armada». Sostiene que España y Francia «cuestionan cotidianamente todo lo que constituye nuestra sociedad (lengua, cultura, educación, economía, ordenamiento territorial). ETA, practicando la lucha armada, limita este proceso de asimilación para que no se convierta en algo irreversible. La lucha armada ha mostrado en múltiples ocasiones su eficacia, crea nuevas situaciones y abre nuevas perspectivas».

Frente a este argumento central de todo grupo terrorista, la estrategia del Estado desde 1998, reforzada por el pacto antiterrorista, ha extendido la persecución legal hacia los sectores de la izquierda abertzale que estaban a la sombra de ETA, pero que se beneficiaban de la tolerancia del sistema democrático y, de esta forma, ha elevado los costes del apoyo al terrorismo considerablemente. El balance, por primera vez, empieza a ser negativo.

⁸ El documento se titula «Reflexiones sobre la lucha armada» y contiene párrafos idénticos a otro texto incluido en el *Zuzen* nº 79.

En el pasado, estar en la órbita de ETA era un factor que daba un poder adicional. Tenía numerosas ventajas, concedía influencia social (y, a veces, ventajas materiales) por efecto del temor que provocaba la organización terrorista. Sin embargo, cuando la persecución legal se ha extendido a esos organismos de la zona de sombra, los costes de estar cerca de ETA han empezado a ser superiores a las ventajas. Entonces, las opiniones han empezado a cambiar y se ha comenzado a cuestionar a la banda.

Así se refleja claramente en un artículo del escritor euskaldun y abertzale, Pako Aristi, quien señalaba que veía a ETA «no en horas bajas, sino bajísimas, con un poder militar muy mermado, matando a políticos de poca enjundia o concejales de pueblo jubilados»⁹. «Contemplo a una ETA que provoca una contradicción desesperante en nuestro pueblo: por una parte no es capaz de hacer un gran daño al Estado, ni provocar en sus diversos estamentos ninguna de las reacciones que busca toda lucha armada. Por otra, ofrece continua y puntualmente al Estado todos los argumentos para poder actuar penalmente contra amplios sectores del País Vasco», indicaba.

Aristi hacía referencia a datos del 2002 y señalaba que «ETA mata a cinco personas y el Estado detiene a seiscientos ciudadanos, registra e intenta anular la actividad de revistas, periódicos, academias de euskera, grupos de música... y a veces lo consigue». Continuaba el artículo de Aristi señalando que «ETA mata a cinco personas, pero luego no paga las fianzas millonarias, no reflota periódicos. Las fianzas se pagan con aportaciones de familiares unidos ante la desgracia, los periódicos renacen con los dinerillos de miles de bolsillos castigados ya por un nivel de vida carísimo».

El escritor terminaba su artículo indicando que sin ETA no habría seiscientos detenidos al año. «Habría treinta y, quizás, tras varios años, nadie». «Viendo la flagrante diferencia entre lo que ETA nos da y lo que se nos quita en su nombre, mi dolor crece. No. Cinco muertos no los valen. Y atendiendo a la evolución social del mundo rico y a la reciente historia de la humanidad, ni cien, ni mil».

En diciembre del pasado año, un centenar de personas relacionadas con la cultura vasca suscribieron un manifiesto solicitando una

⁹ Gara, 6 de marzo de 2003.

tregua y cuestionando la violencia¹⁰. La petición irritó a ETA porque procedía de personas que hasta poco tiempo antes habían estado en su entorno y en silencio.

Es significativo que estos movimientos de distanciamiento de ETA procedan de lo que se llama el mundo de la cultura vasca, el mismo sector del que salieron una gran parte de los votos que en las autonómicas de 2001 se pasaron de la izquierda abertzale a la coalición PNV-EA. Se trata de los sectores más perjudicados por el cierre de *Egin* y de *Egunkaria* y los que más afectados se verían si la acción legal se amplía a las empresas editoriales que operan en el ámbito de la izquierda abertzale. Al mismo tiempo, son los sectores más dependientes de los fondos procedentes del Gobierno vasco, fondos que se verían en peligro si los nacionalistas pierden el poder.

Estas actitudes de desafección de la violencia hay que contraponerlas con el seguidismo incondicional de los dirigentes políticos de la izquierda abertzale, que se han demostrado incapaces de cuestionar el terrorismo y de cuestionar la estrategia de ETA. No hay imagen más penosa y ancilar que la de Arnaldo Otegi explicando por qué ETA había asesinado a José Luis López de la Calle, columnista de *El Mundo*.

Rogelio Alonso, al analizar el caso de Irlanda del Norte, critica el papel del liderazgo de los «provisionales» del IRA y del Sinn Fein, que perdieron oportunidades para acelerar la paz en el país y persistieron en una estrategia violenta que sabían condenada al fracaso. «Su actitud de defensa de la lucha armada constituye en el grupo una fuente de credibilidad que protege a los líderes de la crítica, a pesar de las negativas consecuencias que genera», escribe Alonso (2003, 218 y 219).

Al igual que en el Ulster, los líderes políticos de la izquierda abertzale han pretendido ponerse en la posición más cómoda, negándose a cuestionar por activa o por pasiva el terrorismo de ETA, aunque esa actitud haya supuesto sacrificar a Herri Batasuna.

Rogelio Alonso recoge el testimonio de una ex militante del IRA que afirma que «lo que dice Gerry (Adams) es palabra de Dios. Es el Papa de los Provisionales, totalmente infalible». Nadie en ETA podría decir

¹⁰ *El Diario Vasco*, 18 de diciembre de 2003.

nada parecido de ningún dirigente de Batasuna, porque ninguno de ellos tiene un ascendiente significativo sobre los pistoleros. Tal vez sea que han entendido el mensaje que ETA les transmitió cuando terminó su debate el pasado año exigiéndoles un acatamiento incondicional de la ortodoxia y el reconocimiento del liderazgo de la banda terrorista.

Esos dirigentes políticos, al no ser capaces de desmarcarse de ETA, han conducido a la ilegalización de HB y de todas las organizaciones de su entorno, y luego no han sido capaces de poner en marcha una línea política eficaz para anular los efectos de esa marginación.

La ilegalización ha provocado efectos conocidos, como la exclusión de la izquierda abertzale de las instituciones, con la excepción del Parlamento vasco, y la escasez de fondos para financiar las actividades de Batasuna. Pero, además, y como consecuencia de lo anterior, la izquierda abertzale ha perdido el altavoz que le daba su presencia en las instituciones, en los ayuntamientos o en las Juntas Generales, y ha perdido también capacidad de movilización social, de sacar a la gente a la calle.

El nacionalismo institucional, PNV y EA, con la excepción de su actuación en el Parlamento, apenas ha hecho gestos de solidaridad hacia las candidaturas ilegalizadas. Algún alcalde nacionalista permite la presencia de antiguos miembros de HB en comisiones, pero eso constituye la excepción. Lo habitual en los ayuntamientos ha sido el olvido de la gente de HB. La afirmación de que Batasuna se movería en la clandestinidad como pez en el agua se ha revelado tan falsa como todos los malos augurios con los que se amenazaba para el caso de que se produjera la ilegalización.

ETA y los dirigentes de la ilegalizada Batasuna se consuelan valorando muy positivamente los votos nulos que obtienen en las últimas elecciones, pero si los mirasen con un mínimo de perspectiva no estarían tan satisfechos. En las pasadas elecciones europeas, en el País Vasco y Navarra hubo 113.797 sufragios que, salvo unos pocos centenares, pueden adscribirse a la izquierda abertzale.

En las elecciones europeas de 1999, Euskal Herritarrok, la franquicia de HB en aquel momento, obtuvo 306.923 votos, de ellos 270.942 en el País Vasco y Navarra. Si esta última cifra se compara con los votos nulos del pasado mes de junio se verá que el 58% de

quienes apoyaron entonces a la izquierda abertzale no lo han hecho cinco años más tarde.

En las autonómicas de 2001, la candidatura liderada por Arnaldo Otegi obtuvo 143.139 sufragios. La comparación con los votos nulos registrados en las europeas de junio en la CAV muestra que la izquierda abertzale ha perdido casi un tercio de los apoyos logrados hace tres años.

Las siguientes elecciones fueron las municipales celebradas en 2003. La propia Batasuna aseguró que el respaldo electoral obtenido entonces era de 153.497 votos. La comparación de esos resultados con los de junio evidencia que, en un año, la izquierda abertzale ha perdido el 25,86% de los votos obtenidos en las municipales. Uno de cada cuatro votantes ha abandonado a la ilegalizada Batasuna en los últimos doce meses, y el gran beneficiado es el PNV.

EL MITO DE LA IMBATIBILIDAD

El segundo gran logro de los últimos años es que, definitivamente, se ha roto el mito de la imbatibilidad de ETA por las vías policiales, un mito sólidamente asentado no sólo en el seno de la organización terrorista y sus afines, sino en el conjunto del nacionalismo y, a menudo, fuera incluso de esta ideología.

Ese mito sufrió una grave quiebra en 1992, cuando la operación de Bidart descabezó a ETA y se sumó a un conjunto de actuaciones policiales en territorio español que desmantelaron a la práctica totalidad de las células etarras que habían protagonizado la gran ofensiva terrorista del primer trimestre de ese año. Las rentas del 92 se perdieron, sin embargo, en los años siguientes. Se dejó pasar la oportunidad de arrinconar a los terroristas pensando que, en su debilidad, serían más proclives a negociar e ignorando que esas ofertas de negociación devolvían a los miembros de la banda la moral que tan mermada había quedado.

El acoso policial de los últimos años ha sido eficaz y contundente a ambos lados de la frontera hispano-francesa. Primero se frenó la gran ofensiva terrorista iniciada tras la ruptura de la tregua y luego fueron las fuerzas de seguridad quienes pasaron a la ofensiva.

Los datos reflejan bien esa realidad: ETA rompió la tregua en el año 2000 iniciando una ofensiva de atentados y asesinatos muy potente. Ese año mató a 23 personas, cifra que no había alcanzado desde hacía ocho años. La ofensiva fue intensa durante año y medio. Pasado ese tiempo comenzó a perder terreno y eficacia gracias a la acción de los cuerpos policiales. Si en el 2000 mató a 23 personas, en el 2001 fueron 15 las personas asesinadas, cinco en el 2002 y tres el pasado año. En lo que va de 2004, y hasta el momento de redactar estas líneas, a mediados de septiembre, ETA no ha matado a nadie.

Las cifras de los atentados reflejan también la misma reducción de la actividad terrorista: setenta atentados en el 2000; 59 al año siguiente; 35 en 2002 y 23 en 2003. Excluyendo el año 1999, en el que no hubo atentados por la tregua (y porque la Guardia Civil impidió que ETA en diciembre hiciera estallar dos furgonetas bomba con 1.700 kilos de explosivo en Madrid), para encontrar un periodo con menos actividad terrorista que en los últimos dos años y medio hay que retroceder nada menos que hasta 1971.

ETA está acosada policialmente de manera eficaz, la Ley de Partidos ha permitido poner fuera de la ley a Batasuna, y el juez Garzón ha ilegalizado a grupos como Jarrai, las Gestoras o Xaki, entre otros. El resultado es la existencia de unos altos niveles de seguridad personal y de tranquilidad social. La violencia callejera está prácticamente desaparecida, salvo incidentes ocasionales que no tienen efecto político alguno.

El ex portavoz del Gobierno vasco y ex militante del PNV, Joseba Arregi, señalaba recientemente que uno de los cambios cualitativos más importantes que se ha producido en la sociedad vasca en los últimos años ha sido, precisamente, que se ha logrado acabar con el mito de la imbatibilidad de ETA, «gracias, entre otras cosas, al pacto antiterrorista que suscribieron el PSOE y el PP»¹¹. Arregi destaca que en la consecución de ese cambio «el nacionalismo no ha estado presente».

El balance del Acuerdo por las Libertades y contra el Terrorismo es altamente positivo para el Estado y para sus ciudadanos, pero el trabajo no ha terminado. ETA, aunque más débil, sigue presente y amenazadora. Todos los pronunciamientos que de ella conocemos,

¹¹ *El Correo*, 5 de septiembre de 2004.

Cuadernos de pensamiento político

los públicos y los de difusión interna, van en una misma línea: continuar con la actividad terrorista. No cabe esperar, por tanto, otra cosa de la banda. La actitud del Estado y de los dos grandes partidos, por su mayor responsabilidad, debería estar a la altura de ese reto.

Es cierto que en los últimos meses han aparecido otras amenazas terroristas que en el pasado no existían o no habían sido valoradas convenientemente. Eso obliga a la estructura de seguridad del Estado a realizar cambios y a adaptarse a la nueva situación para afrontar eficazmente los dos retos sin perder eficacia en ninguno de los dos. Es algo que puede conseguirse.

ETA está con el agua al cuello y sometida a una gran presión en todos los frentes, pero si se afloja la presión, ETA y su mundo pueden volver a recuperarse. En la lucha contra el terrorismo, mientras no se logre su erradicación definitiva, nada es irreversible. Lo que se avanza un día se puede perder al día siguiente si no se mantiene una política basada en la firmeza y la constancia.

BIBLIOGRAFÍA

- Alonso, Rogelio (2003): *Matar por Irlanda*. Alianza.
Onaindía, Mario (2004): *Testigo privilegiado*. Ediciones B. Barcelona.